

COLUMNAS[®]

— REVISTA LEGAL —
LEGAL MAGAZINE



MUNIZ
OLAYA
MELENDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados

NÚMERO 216



EN ESTE NÚMERO | IN THIS ISSUE

Reflexiones en torno a los reglamentos disciplinarios de las universidades y los recientes pronunciamientos de Sunedu

Reflections on university disciplinary regulations and recent statements by the national superintendence of higher education (SUNEDU)

El derecho de defensa en los procedimientos disciplinarios laborales

Right to a defense in labor disciplinary proceedings

Clausura: ¿será aplicada correctamente por los municipios?

Closure: will it be correctly applied by Municipalities?

Comentarios a la casación n.º 23232-2023-Lima, deducibilidad de gastos por regalías

Comments on cassation ruling No. 23232-2023-Lima, deductions for royalty expenses



Reflexiones en torno a los reglamentos disciplinarios de las universidades y los recientes pronunciamientos de Sunedu

5

HILDA FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
Asociada, especialista en derecho administrativo y publicidad



Clausura: ¿será aplicada correctamente por los municipios?

PERCY SUAZO CARMELO
Socio, especialista en regulación municipal y derecho administrativo

8

COMENTARIO TRIBUTARIO

Comentarios a la casación n.º 23232-2023-Lima, deducibilidad de gastos por regalías

11

MARIO AGRAMONTE TORRES
Abogado, especialista en derecho tributario



COMENTARIO LABORAL

El derecho de defensa en los procedimientos disciplinarios laborales

13

OJALÍ VÍCTOR ÁVALOS JARA
Socio, especialista en derecho laboral y seguridad social



El valor de los elementos de propiedad intelectual como activo empresarial

16

JOHANA CALDERÓN VALENCIA
Socia, especialista en propiedad intelectual



Precedentes vinculantes y predictibilidad judicial

19

JULISSA YAMANI FERNÁNDEZ
Socia, especialista en litigios y controversia



Comentarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desde un enfoque penal

22

JUAN JOSÉ ALBÁN PARRA
Asociado senior, especialista en derecho penal - Sede Piura



DESDE EL CONGRESO

- * Considerar perdigones y pistolas de descarga eléctrica como armas no letales.
- * Derogar decreto legislativo que condena hasta con 15 años el bloqueo de vías.

25

ALERTA MÁXIMA

27

Aprueban porcentaje para límite de devolución del ISC del primer trimestre 2024



ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

- * Desayuno ejecutivo
- * World trademark review
- * Leaders League 2024

29

COLUMNAS
REVISTA LEGAL
NÚMERO 216

El contenido de la revista es académico. No debe ser interpretado como adelanto de opinión del Estudio, ni deben extraerse recomendaciones para decisiones legales específicas.
El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, divulgado o registrado, sin autorización previa y por escrito de Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados®.

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú
Nº 2007-07703

Número anterior Nº 215

ESTUDIO MUÑIZ
MUÑIZ
OLAYA
MELÉNDEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados

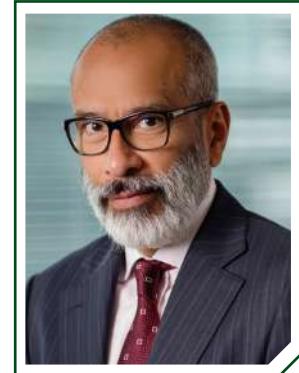
Comité Editorial:
Fernando Meléndez
Arturo Ferrari
Silvia Núñez
Alexandra Ojeda

Comentarios y sugerencias:
aferrari@munizlaw.com
snunez@munizlaw.com

OPENSAC
IDEAS & SOLUCIONES

editor.open@gmail.com
T-(51) 936 645 459

"Es espantoso que gente tan ignorante tenga tanta influencia"
George Orwell



FERNANDO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ
 Socio principal - editor

EN CAÍDA LIBRE¹

En la tarde/noche del domingo 2 de junio miles de personas se quedaron abandonadas a su suerte, o varadas, en el aeropuerto Jorge Chávez al cancelarse más de doscientos cincuenta vuelos comerciales como consecuencia de una falla en el sistema de iluminación de la pista de aterrizaje de dicho terminal aéreo. «Nadie tiene la responsabilidad, es un evento fortuito», se apuró en declarar el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) al ser confrontado por los medios de prensa en las horas siguientes. Luego nos enteraríamos que dicha infraestructura eléctrica no recibió ningún tipo de mantenimiento durante, al menos, los últimos 14 años; «fina cortesía» de la entidad estatal responsable, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC), adscrita al MTC.

El grave incidente trajo inmediatamente a nuestra memoria la pomposa «inauguración» de la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control llevada a cabo por la presidenta Dina Boluarte los primeros días del mes de abril del año pasado, oportunidad en la cual la mandataria afirmaría: «...uno de los grandes beneficios de tener las dos pistas operativas es que en caso hubiese un incidente en una de ellas se podrá usar la otra como pista de emergencia, ya no se necesitará aterrizar en otros aeropuertos regionales aledaños...». Como es obvio la segunda pista de aterrizaje «inaugurada» en aquella oportunidad no solo no se usó la noche de ese día, sino que un año después no puede emplearse aún por los graves problemas técnicos detectados en los cristales instalados en la nueva torre de control, también «inaugurada».

¿Por qué la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad que depende directamente del MTC, le dio el visto bueno a Lima Airport Partners (LAP) para que la presidenta inaugurara algo que no estaba apto para entrar en funcionamiento? La respuesta, sea cual fuera, es la imagen vivida de nuestro país y su precaria, cada vez más precaria, institucionalidad.

Así estamos, abandonados a nuestra suerte todos los peruanos (cuál pasajeros en tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez el domingo pasado) en manos del duo conformado por la nefasta simbiosis (Legislativo-Ejecutivo) que hoy nos gobierna. Y lo peor es que no se enteran o no se dan por enterados, pues entre el silencio atronador (valga el oxímoron) de la presidenta (más de 60 días sin dar ningún tipo de declaración a la prensa) y según las últimas encuestas hechas públicas con tan solo 5% de aprobación ciudadana y el desparpajo del Legislativo –ya sin vergüenza alguna– promulgando normas manifiestamente populistas, pero absolutamente antitécnicas, no nos quedará más remedio que encomendarnos a alguna fuerza divina o invocando a nuestro egregio poeta, rogar que el Perú (cadáver) reaccione². ¶

¹ En física, caída libre, se denomina al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar en el seno de un fluido; sin embargo, es frecuente también referirse coloquialmente a estas como caídas libres, aunque los efectos de la viscosidad del medio no sean por lo general despreciables.

² César Vallejo, *Masa*
 Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre; echóse a andar...

"It's frightful that people who are so ignorant have so much influence,"
George Orwell

FREE FALL¹

In the afternoon/evening of Sunday June 2nd, thousands of people were left or stranded at Jorge Chavez airport since over two hundred and fifty commercial flights were cancelled as a result of a crash in the runway lighting system of the air terminal. "No one is liable, this is an unforeseeable event", hastened to point out the minister of Transport and Communications (MTC in Spanish) when asked by the media in the next hours after the event. We would later know that no maintenance at all had been provided to said electrical infrastructure at least during the last 14 years, a "courtesy" of the corresponding government body, the Peruvian Corporation of Airports and Commercial Aviation (CORPAC in Spanish), which is assigned to the MTC.

This serious incident immediately made us remember the bombastic "inauguration" of the second runway and the new control tower by President Dina Boluarte on early April 2023, where the chief executive stated: "...one of the biggest benefits of having two operational runways is that, if there is an incident in one of them, the other one would be used as an emergency runway, and it would be needless to land in adjoining regional airports...". Obviously, the second runway, "inaugurated" at the time not only was not used at night that day, but also cannot be used a year later due to serious technical issues detected in the crystals installed in the new control tower, "inaugurated" as well.

Why did the General Directorate of Civil Aviation (DGAC in Spanish), an entity directly dependent on the MTC, grant the approval to Lima Airport Partners (LAP) so that the President inaugurated something that was not

ready to be used? The answer, whatever it is, is the vivid image of our country and its each time more precarious institutional framework.

All of us Peruvians are, thus, abandoned to our fate (like the passengers on transit at Jorge Chavez airport last Sunday) in the hands of the nefarious symbiosis formed by the Legislative and Executive branches that is currently in control of the government. The worst part is that they do not realize this, or do not want to admit it. Among the thunderous silence (forgive the oxymoron) of the President (it has been over 60 days without any press statement), the latest polls made public that show only 5% of citizen approval and the brazen Legislative Branch - showing no shame at all - that keeps enacting clearly populist and anti-technical rules, we will have no other choice but to commend ourselves to some divine force or invoke our eminent poet and beg Peru (the corpse) to wake up.² ||

¹ In physics, free fall is the movement of a body under the force of gravity only. This formal definition excludes any real fall influenced to a higher or lower extent by air drag, as well as any other that takes place in a fluid; however, they are usually called free falls, although the medium viscosity effects are not usually negligible.

² César Vallejo, *Masses*
Then all the inhabitants of the Earth surrounded him; the corpse looked at them sadly, deeply moved; he got up slowly, embraced the first man; started to walk...



REFLEXIONES EN TORNO A LOS REGLAMENTOS DISCIPLINARIOS DE LAS UNIVERSIDADES Y LOS RECIENTES PRONUNCIAMIENTOS DE SUNEDU

En febrero del año en curso el Consejo Directivo de Sunedu emitió resoluciones disponiendo el archivo de procedimientos administrativos sancionadores iniciados contra universidades en casos vinculados a procedimientos disciplinarios iniciados contra alumnos y docentes.

En específico, se iniciaron procedimientos por la supuesta infracción del numeral 4.7 del Anexo del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Sunedu, aprobado por Decreto Supremo n.º 005- 2019-MINEDU.

El citado numeral prevé:

"Permitir el incumplimiento, cumplimiento defectuoso, retraso, negativa, omisión o excesos en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria y el estatuto a los órganos y/o autoridades de gobierno de la universidad, cuando ello afecte o perjudique el correcto funcionamiento de la universidad o el desempeño del cargo".

En efecto, se iniciaron procedimientos contra universidades por haber incumplido con sus atribuciones, establecidas en la Ley Universitaria, al no haber determinado la responsabilidad por hostigamiento sexual de alumnos y docentes en procedimientos disciplinarios.

Lo particular de las mencionadas resoluciones radica en el criterio introducido respecto de la prescripción de infracciones vinculadas al hostigamiento y acoso sexual. De acuerdo con las resoluciones, la infracción que investiga la universidad es el presunto acto de hostigamiento sexual cometido por algún miembro de la comunidad universitaria, que no es lo mismo que la infracción que investiga Sunedu; esto es el permitir el incumplimiento de funciones. Sin embargo, según lo dispuesto en las resoluciones, pese a que se trata de persecuciones distintas, ambas confluyen al momento de la toma de conocimiento del presunto acto de hostigamiento sexual.

Es así que para el Consejo Directivo de Sunedu, la infracción no se trata de una infracción permanente ni continuada, sino instantánea, y se consuma desde que la universidad toma conocimiento de los hechos porque, desde ese momento, la universidad está en la obligación de no permitir que los órganos incumplan sus funciones. Al no hacerlo, su inacción empieza a lesionar el bien jurídico. En consecuencia, consideran que la infracción tiene carácter instantáneo y, por tanto, el plazo para que Sunedu persiga la presunta infracción se configura desde esa oportunidad. Por ello, interpretan que el plazo de prescripción es de 4 años y que ha operado en los casos materia de evaluación en las resoluciones.

Ahora bien, frente a esta interpretación, surgen posiciones jurídicas que discrepan con lo resuelto por el Consejo Directivo, argumentando que en realidad se trataría de una infracción permanente y que se estarían vulnerando los derechos constitucionales de las víctimas.

Bajo este escenario, se advierte que resulta imperativo accionar frente a la presunta comisión de faltas en el menor tiempo posible para evitar que el Consejo Directivo resuelva en el mismo sentido en casos futuros. Para ello, uno de los elementos necesarios consiste en contar con reglamentos disciplinarios que contemplen acciones efectivas que permitan perseguir las faltas con mayor efectividad. Es preciso incluir en su ámbito de aplicación a todos los miembros de la comunidad universitaria, incluyendo egresados, así como colaboradores y docentes que culminaron sus vínculos educativos, de servicios o laborales con las universidades para asegurar que las infracciones sean debidamente fiscalizadas y así lograr que se efectivice la imposición de sanciones cuando correspondan.

Aunado a lo anterior y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, nuevas modalidades educativas, así como nuevas metodologías, también es necesario realizar una revisión exhaustiva de las faltas previstas en los reglamentos disciplinarios existentes en las universidades y modificarlos en caso se advierta que ciertas infracciones no se encuentran contempladas.

Bajo el marco de su autonomía, las universidades se encuentran facultadas a realizar este tipo de regulación interna para velar adecuadamente por la comunidad universitaria y, por ello, corresponde que los reglamentos disciplinarios sean actualizados para lograr que sean instrumentos efectivos y se encuentren alineados a las circunstancias actuales para así realizar acciones más acertadas para erradicar la impunidad. ■■■

**HILDA FERNÁNDEZ VELÁSQUEZ***Asociada, especialista en derecho administrativo y publicidad**Associate, Advertising and Administrative Law Specialist**hffernandez@munizlaw.com*

En febrero del año en curso el Consejo Directivo de Sunedu emitió resoluciones disponiendo el archivo de procedimientos administrativos sancionadores iniciados contra universidades en casos vinculados a procedimientos disciplinarios iniciados contra alumnos y docentes.

Reflections on University Disciplinary Regulations and Recent Statements by the National Superintendence of Higher Education (SUNEDU)

In February 2024, the Board of Directors of SUNEDU issued a number of resolutions ordering the closing of administrative sanctioning proceedings initiated against universities in connection with cases related to disciplinary proceedings brought against students and faculty.

Specifically, proceedings were initiated for the alleged violation of subsection 4.7 of the Annex to the Regulations on Infringement and Sanctions of SUNEDU, approved by Supreme Decree No. 005-2019-MINEDU.

This subsection stipulates the following:

"Where governing bodies and/or authorities of universities fail to comply with their duties, perform defectively, delay, refuse, omit to or abuse of the powers conferred upon them by the University Law and the Statutes and such attitude affects or impairs the proper functioning of the university or adequate discharging of office duties."

Such claims were filed against several universities for failing to discharge their duties, as established in the University Law. In fact, such instances failed to attribute responsibility in disciplinary proceedings concerning sexual harassment initiated by students and faculty.

These resolutions stand out for the criterion applied regarding the statute of limitations for offenses related to sexual harassment and sexual assault. According to the resolutions, these two entities examined different offenses. In fact, universities investigated alleged acts of sexual harassment committed by a member of the university community, whereas SUNEDU investigated the breach of duty by university bodies. However, as stated in the resolutions and despite the fact that these are separate prosecutions, the cases are similar in that such bodies learned about the alleged acts of sexual harassment at the same time.

Thus, for the SUNEDU Board of Directors, the violation is neither permanent nor ongoing, but instantaneous, and is consummated from the moment the university becomes aware of the facts because, from that moment, the university is required to prevent its bodies from disregarding their duties. By failing to discharge its duties, the university is further damaging individuals' rights. Consequently, the Board considers that these infringements are instantaneous and, therefore, the statute of limitations for SUNEDU to pursue the alleged violation starts at such time. Hence, the Board construes that the statute of limitations is four years, and that it has expired in the cases assessed in the resolutions.

However, there is certain opposition to the Board's interpretation; these legal opinions argue that such omission should be viewed as an offense infringing victims' constitutional rights.

In this scenario, it is imperative to act on the alleged misconduct in the shortest possible time to prevent the Board from ruling in the same way in future cases. Hence, it is necessary to develop disciplinary regulations that provide for effective actions that allow for a more efficient prosecution of misconducts. It is necessary to include in their scope of application all members of the university community, including graduates, as well as collaborators and faculty who have no further educational, service or labor ties with the universities to ensure that such offenses are duly supervised and thus achieve the effective application of penalties, when appropriate.

Moreover, with the development of new technologies, new educational modalities and new methodologies, it is also necessary to carry out a comprehensive examination of the offenses provided for in the existing disciplinary regulations of the universities and to amend them if certain offenses are not included.

Within the framework of their autonomy, universities are entitled to make these types of internal provisions in order to adequately protect the university community and, therefore, disciplinary regulations must be updated to ensure that they are effective instruments and are aligned with current circumstances in order to carry out more appropriate actions to eradicate impunity. |||



CLAUSURA: ¿SERÁ APLICADA CORRECTAMENTE POR LOS MUNICIPIOS?

Sin importar el alcance económico, tipo de actividad y complejidad del negocio, toda empresa tiene dimensionada la contingencia que significa una clausura municipal, pues dicha medida tiene como condiciones para su reapertura el pago de una multa, el desarrollo de alguna mejora, el inicio de un procedimiento y, lo peor de todo, depender de la voluntad de las autoridades municipales.

Si bien es cierto, la autoridad municipal tiene la facultad de fiscalizar el cumplimiento normativo, la misma no es ejecutada de una manera idónea, siendo muchas de estas situaciones expuestas a la opinión pública como una acción de defensa, generándose en el colectivo una sensación de abuso de autoridad. Con la finalidad de regular dichas actuaciones, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República detectó dos problemas principales en el ejercicio de la actividad municipal:

- 1) Alto grado de discrecionalidad de las autoridades municipales: identificándose casos de arbitrariedad y adopción de medidas desproporcionadas.
- 2) Disparidad en los régimen sancionadores: por existir diferencias en las facultades de la potestad sancionadora de cada uno de los municipios a nivel nacional, basados en la aplicación de sanciones regulada bajo sus propias ordenanzas.

Para abordar los problemas, el Congreso determinó la necesidad de uniformizar los criterios de clausura de un establecimiento. Por ello, mediante la Ley n.º 31914, publicada el 28 de octubre de 2023, se



PERCY SUAZO CARMELO

Socio, especialista en regulación municipal y derecho administrativo
Partner, municipal regulation and administrative law specialist
psuazo@munizlaw.com

Sin importar el alcance económico, tipo de actividad y complejidad del negocio, toda empresa tiene dimensionada la contingencia que significa una clausura municipal, pues dicha medida tiene como condiciones para su reapertura el pago de una multa, el desarrollo de alguna mejora, el inicio de un procedimiento y, lo peor de todo, depender de la voluntad de las autoridades municipales.

modifica la Ley n.º 28976- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, bajo la cual se determinan los supuestos específicos para proceder con la clausura temporal.

El primer supuesto dispone la aplicación de la clausura cuando se afecten condiciones de seguridad. La autoridad deberá constatar la existencia de un peligro inminente para la vida, salud, propiedad o la seguridad de las personas y que dicho riesgo de peligro no pueda ser subsanado en el propio acto de inspección.

El segundo supuesto es por carecer de licencia de funcionamiento, sanción que es aplicada de manera objetiva y se podría materializar en el hecho de no exhibir la licencia de funcionamiento ante la intervención municipal.

El tercer supuesto es por no contar con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (Certificado ITSE), documento que acredita el cumplimiento de seguridad para el desarrollo de las operaciones dentro del inmueble; sin embargo, se regula como excepción cuando el administrado se encuentre en procedimiento de renovación, el cual debe ser iniciado con 30 días hábiles de anticipación a su vencimiento.

El cuarto supuesto se encuentra vinculado a los giros detallados en la licencia de funcionamiento, refiriéndose a la descripción de actividades económicas que se desarrollan dentro del predio. En la práctica, este supuesto permite la aplicación subjetiva de la medida de clausura, exigiéndose que la licencia incluya de manera textual todas las actividades que se realicen, incluso si son consideradas como giros afines o complementarios a la actividad principal. De esta forma, bajo riesgo de ser clausurados, las empresas se ven obligadas a actualizar su licencia de funcionamiento y certificado ITSE.

El Ministerio de la Producción, a través del Decreto Supremo n.º 011-2017-PRODUCE y Decreto Supremo n.º 009-2020-PRODUCE, determina los giros simultáneos y adicionales (lista de actividades) que no requieren de la evaluación municipal bajo un nuevo procedimiento de licencia de funcionamiento, pues el mismo solo se acredita con la presentación de una declaración jurada a la autoridad municipal. Asimismo, y como concepto sustancial, las municipalidades no deben aplicar definiciones de giro afín o complementario con criterios limitados y restrictivos, debiendo las mismas ser reguladas bajo una ordenanza distrital. Lastimosamente, a la fecha, dicha identificación de giros afines y complementarios no ha sido desarrollada por los distintos municipios.

Como quinto y último supuesto se considera la generación de olores, humos, ruidos u otros efectos que puedan afectar la tranquilidad del vecindario cuando excedan los límites establecidos. Ello genera la necesidad que la autoridad municipal se prepare, capacite y tenga las herramientas necesarias para poder acreditar la existencia de valores superiores a lo regulado. Esto no se viene cumpliendo, quedando ello a la subjetividad de la autoridad fiscalizadora.

Finalmente, es motivo de preocupación que, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la norma, aún son pocas las municipalidades que han adecuado sus instrumentos normativos, es decir, actualizar las ordenanzas que se vinculan a la facultad sancionadora, lo cual se ve reflejado en actuaciones administrativas que denotan una indebida aplicación de la ley. |||

Closure: will it be correctly applied by Municipalities?

Regardless of the economic scope, type of activity and complexity of the business, every company is aware of the magnitude of municipal closure, since this measure involves certain conditions for reopening the company, such as: payment of a fine, development of some improvement, beginning of a procedure and, worst of all, the will of the municipal authorities.

Although it is true that the municipal authority has the power to supervise regulatory compliance, it is not implemented in a suitable manner, and many of these situations are exposed to public opinion as an advocacy action, thus generating a feeling of abuse of authority in the community. In order to govern such actions, the Commission of Decentralization, Regionalization, Local Governments and Modernization of the State Management of the Congress of the Republic detected two main problems in municipal activity:

- 1) High level of discretion of the municipal authorities: identifying cases of arbitrariness and adoption of disproportionate measures.
- 2) Disparity of sanctioning regimes: due to differences in the sanctioning powers of each municipality at the national level, based on the application of sanctions regulated under their own ordinances.

To address the problems, the Congress determined the need to standardize the criteria for the closure of an establishment. Therefore, through Law No. 31914, published on October 28, 2023, modifies Law No. 28976-Operating License Framework Law, under which specific cases to proceed with the temporary closure are determined.

The first assumption sets out that closure applies when the safety conditions are compromised. The authority must verify the existence of an imminent danger to life, health, property, or the safety of individuals, and that such risk cannot be rectified during the inspection.

The second assumption is the lack of an operating license; this sanction is objectively applied and could be materialized in the fact of not displaying the operating license when the municipal intervention takes place. The third assumption is not having the Technical Inspection of Building Safety Certificate (ITSE Certificate), a document ensuring safety compliance for the development of the operations within the property. However, it is treated as an exception when the citizen is in process of renewal, which must be started 30 working days prior to its expiration date.

The fourth assumption is linked to the business activities detailed in the operating license, and refer to the description of economic activities developed within the property. In practice, this case allows the subjective application of closure; it demands that the license includes all the business activities carried out, word for word, even if they are considered related or complementary to the main activity. Thus, companies are forced to update their operating license and ITSE certificate at the risk of being closed.

The Ministry of Production, through Supreme Decree No. 011-2017-PRODUCE and Supreme Decree No. 009-2020-PRODUCE, determines simultaneous and additional business activities (list of activities) that do not require municipal evaluation under a new operating license procedure, since it is only credited by submitting a sworn statement to the municipal authority. Likewise, and as a substantial concept, municipalities should not apply definitions related to or complementary with limited and restrictive criteria, and a district ordinance should govern them. Unfortunately, to date, municipalities have not prepared said identification of related and complementary business activities.

The fifth and last assumption is the generation of smells, fumes, noise and other effects that may affect the peace of a neighborhood when they surpass the established limits. This means the municipality needs to prepare, train and have the necessary tools to prove the existence of values higher than those allowed. However, this is not being met, thus leaving compliance to the subject criterion of the supervisory authority.

Finally, it is a concern that, despite the time elapsed since the come into effect of the regulation, still few municipalities have adapted their regulatory instruments; this means, updating ordinances related to the sanctioning power, which is reflected in administrative actions that indicate an undue application of the law. |||

Comentarios a la casación N.º 23232-2023-LIMA, deducibilidad de gastos por regalías



MARIO AGRAMONTE TORRES
Abogado, especialista en derecho tributario
Lawyer, Tax Law Specialist
magramonte@munizlaw.com

En los procedimientos de fiscalización iniciados por la Sunat una de las acotaciones más recurrentes en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría recae sobre la causalidad de los gastos por licencia de uso de marcas.

Así, a pesar de que el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta señala expresamente en su inciso p) que las regalías son deducibles, la Sunat reiteradamente desconoce tales deducciones:

- 1) Cuestionando que las marcas en algunas ocasiones preexistían al acuerdo de licencia de uso y venían siendo utilizadas gratuitamente por las empresas; o,
- 2) exigiendo que el contribuyente acredite que el uso de las marcas generó objetivamente un incremento en los ingresos.

Al respecto, en un proceso judicial patrocinado por nuestra firma, recientemente la Corte Suprema de Justicia resolvió favorablemente para el contribuyente una controversia tributaria sobre la causalidad de los gastos por regalías incurridos en el ejercicio 2017.

A través de la Sentencia de Casación n.º 23232-2023-LIMA, se abordó un caso en que la Sunat cuestionó que no existía la necesidad de realizar el pago por dicho concepto, porque las marcas habían sido utilizadas anteriormente por el contribuyente sin que medie retribución alguna; además de indicar que no se había acreditado que el uso de las marcas en el ejercicio fiscalizado hubiera generado un incremento en sus ingresos.

El razonamiento aplicado por la Corte Suprema es que, si bien se habían venido utilizando las marcas sin que medie pago alguno, una vez inscritas ante el Indecopi su situación legal varió, por lo que a partir de ese momento debía pagarse una retribución que posibilite jurídicamente el uso de las marcas de titularidad de terceros (en este caso, los accionistas), por lo que ello acreditaba la necesidad del gasto. Asimismo, se indicó que el hecho de que el contribuyente haya decidido no oponerse al registro de los signos distintivos que ya venía utilizando atiende a razones exclusivas de gestión empresarial, máxime si no existía una prohibición legal que lo imposibilitase.

En nuestra opinión, el análisis efectuado por la Corte Suprema es correcto, toda vez que los cuestionamientos de la Sunat no recayeron sustancialmente sobre la causalidad del gasto, que sí estaba acreditada por el hecho de que existía un registro de las marcas y su utilización necesariamente requería del pago de regalías, independientemente de que se hayan incrementado o no los ingresos del contribuyente.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante recordar que existe un “Catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal”, cuyo primer ejemplo es el de “Deducción de regalías por cesión en uso de marca”, que describe una situación que a consideración de la Sunat podría implicar un potencial incumplimiento tributario, por lo que es claro que insistirá en formular este tipo de acotaciones en aplicación de la norma antielusiva general prevista en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

Siendo ello así, este tipo de casos deberán ser analizados uno a uno, por lo que su deducibilidad y la potencialidad de ser defendidos de manera exitosa dependerá de sus particularidades y medios probatorios. |||

Comments on cassation ruling no. 23232-2023-LIMA, deductions for royalty expenses

Regarding audit procedures by the National Superintendence of Customs and Tax Administration (SUNAT), one of the most recurrent assessments when determining the third-bracket income tax is to the causal link of expenses paid for the trademark use licenses.

Thus, despite the fact that Section 37.p of the Income Tax Law expressly states that royalties are deductible, SUNAT repeatedly disregards such deductions:

- 1) By questioning that, in certain instances, trademarks preceded the license agreement and were used free of charge by companies; or,
- 2) by requiring taxpayers to prove that the use of trademarks income objectively increased income.

In this regard, in a case defended by our firm, the Supreme Court resolved favorably for the taxpayer a tax controversy concerning the causal link between expenses and royalties incurred in the 2017 fiscal year.

Cassation Ruling No. 23232-2023-LIMA resolved a case in which SUNAT questioned the need to pay such an item, since the trademark had been previously used by the taxpayer without paying any fee. In addition, it was alleged that there was no evidence proving that the use of trademarks during the audited year had increase their income.

The Supreme Court's reasoning was that, although the trademarks had been used without paying any fee, once they were registered before the National Institute for the Defense of Free Competition and the Protection of Intellectual Property (INDECOPI), their legal situation changed, and, therefore, from that moment on a fee had to be paid to legally enable the use of the trademarks owned by third parties (i.e., shareholders), thus proving the need for the expense. It was also indicated that the fact that the taxpayer decided not to challenge the registration of the distinctive signs that it had already been using was exclusively for business management reasons, especially if there was no legal prohibition that made it impossible to do so.

In our opinion, the Supreme Court's analysis is correct, since SUNAT's questions did not substantially address the causal link of the expense, which was indeed proven by the fact that the trademarks were registered and their use necessarily entailed the payment of royalties, regardless of whether or not the taxpayer's income had increased.

Without limiting the foregoing, it is important to remember that there is a "Catalog of high-tax risk plans", the first example of which is the "Deduction of royalties for assignment in use of a trademark", which describes a situation that, in the opinion of SUNAT could imply a potential tax non-compliance, so it is clear that it will insist on making this type of assessment in application of the general anti-avoidance rule provided for in Rule XVI of the Preliminary Title of the Tax Code.

Therefore, such cases should be analyzed on a case-by-case basis, and applicable deductions and potential to be successfully defended will depend on particularities and evidence of each situation. |||

El derecho de defensa en los procedimientos disciplinarios laborales



OXAL VÍCTOR ÁVALOS JARA
Socio, especialista en derecho laboral y
seguridad social
Partner, labor law and social security expert
oavalos@munizlaw.com

De una lectura de nuestra normativa podemos advertir que, expresa y únicamente, se ha regulado un procedimiento disciplinario para los casos en los que el empleador pretenda despedir al trabajador, no ocurriendo lo mismo para los casos en que la sanción sean amonestaciones o suspensiones.

De este modo, el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral prevé que el empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable, no menor de seis días naturales, para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulase o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.

Este procedimiento tiene por objeto garantizar el derecho de defensa del trabajador, de allí que la exigencia mínima es que aquel se inicie con una carta de preaviso en la que se le indique, de modo claro y preciso, los hechos que dan lugar a las imputaciones, la base legal que ha servido para establecer la infracciones y los medios probatorios que correspondan.

Con ello el trabajador podrá saber con certeza de qué se le acusa y podrá contradecir, cuestionar, aceptar o, simplemente, no pronunciarse al respecto, pero bajo ninguna perspectiva podrá establecerse que se ha vulnerado su derecho fundamental de defensa.

Luego de ello, el empleador toma la decisión final, pudiendo extinguir la relación laboral, absolver al trabajador o aplicar una sanción menor.

Excepcionalmente, se puede omitir ese trámite si es que estamos ante un caso de falta grave flagrante, es decir, cuando el empleador haya advertido la infracción en el mismo instante de la ocurrencia de hechos y que la responsabilidad del trabajador sea indubitable.

Debido a la falta de regulación, durante muchos años los empleadores han sancionado a los trabajadores con suspensiones y amonestaciones sin establecer un procedimiento previo, lo que no significaba necesariamente que se vulneraba el derecho de defensa, ya que, en muchos casos, el trabajador tenía el derecho a pedir la reconsideración o a impugnar la decisión.

Esta situación dio lugar a que exista controversia respecto a la necesidad de implementar estos procedimientos previos para los casos de sanciones distintas al despido. Es así que se emitieron algunas sentencias casatorias contradictorias, lo que generó la necesidad de aclarar este asunto.

El 19 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el X Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional en el que, entre otros, se acordó que: “cuando el empleador considere que corresponde imponer una medida disciplinaria distinta al despido, deberá garantizar, desde el inicio, el derecho de defensa del trabajador, en un contexto de respeto al debido proceso”.

En observancia de este criterio los empleadores deben implementar procedimientos disciplinarios que le permitan al trabajador ejercer su derecho de defensa, vale decir que, antes de que se tome la decisión final, tengan la posibilidad de efectuar sus descargos frente a las imputaciones.

el artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral prevé que el empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable, no menor de seis días naturales, para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulase o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.

Cabe resaltar que dicho criterio no asimila estrictamente este procedimiento con el previsto para los casos de despido, por lo que no necesariamente se deben conceder seis días para los descargos, pudiendo ser un plazo menor que razonablemente garantice que el trabajador pueda defenderse de las imputaciones.

Por consiguiente, es indispensable que para el ejercicio legítimo y válido de la potestad disciplinaria del empleador se garantice el derecho de defensa del trabajador en todos los casos, salvo el caso de la infracción flagrante.

De esta forma, a fin de evitar dudas o la existencia de arbitrariedades, es recomendable que se cuente en el reglamento interno de trabajo con un capítulo que diseñe las particularidades el procedimiento disciplinario o, en todo caso, con una política que prevea esta materia en forma clara.

Esto es de suma importancia para los empleadores, pues evitará que la Autoridad Inspectiva de Trabajo, la que tiene un criterio uniforme sobre este asunto, pueda invalidar las sanciones y aplicar multas por vulnerar el derecho de defensa y otras que se deriven de esos hechos y, además, que en la vía judicial no se otorguen indemnizaciones o se dispongan reposiciones por el solo hecho de haber inobservado aspectos formales vinculados al procedimiento disciplinario. ■■■

Right to a Defense in Labor Disciplinary Proceedings

From a reading of Peru's legislation, it is possible to notice that the only disciplinary proceeding expressly and solely regulated is the case where an employer intends to lay off an employee; there are no provisions for such cases in which the sanction is a reprimand or suspensions.

Thus, Section 31 of the Labor Productivity and Competitiveness Act establishes that an employer may not lay off an employee for causes related to the employee's conduct or ability without first granting them -in writing- a reasonable period of time of not less than six calendar days to defend themselves -in writing- of the charges against them, or thirty calendar days to demonstrate their ability or to correct their deficiency.

The purpose of this procedure is to guarantee the employee's right of defense, hence the minimum requirement is that the procedure must be initiated with a letter of notice which states clearly and precisely describing the facts, the legal grounds used to establish the offenses, and the corresponding evidence.

Thus, the employee may know with certainty what they are accused of and may rebut, question, accept, or simply not speak out on the matter, but under no circumstances may it be established that their fundamental right to defense has been violated.

After that, the employer makes the final decision, and may terminate the employment relationship, acquit the employee or apply a milder type of punishment.

Under exceptional circumstances, this procedure may be omitted when dealing with a case of flagrant gross misconduct, i.e., when the employer noticed the offense at the very moment of occurrence of the facts and the employee's responsibility is unquestionable.

For many years and in the absence of any regulation, employers have penalized employees with suspensions and reprimands without following a prior procedure; yet, this did not necessarily mean that a worker's right of defense was violated, since employees frequently had the right to request a reconsideration or challenge the decision.

This situation resulted in a controversy regarding the need to implement these prior procedures in cases of sanctions other than lay-offs. Thus, some contradictory cassation rulings were issued, generating the need to clarify this matter.

On December 19, 2022, the Tenth Supreme Jurisdictional Plenary Meeting on Labor and Social Security matters was held. Supreme Justices agreed, *inter alia*, that: "Whenever an employer considers that it is appropriate to impose a disciplinary measure other than dismissal, employer shall ensure, from the beginning, that employee has a right to defense within the context of due process."

In compliance with this standard, employers must implement disciplinary proceedings that allow employees to exercise their right to defense, i.e., before the final decision is made, employees must have the opportunity to present their defense against the charges.

It should be noted that this standard does not assimilate this procedure with the one provided for dismissal cases; therefore, it does not mean that the six-day term granted for employees to exercise their defense shall apply. In fact, a shorter period of time may apply as long as it is reasonable to ensure that employees can defend themselves from the accusations.

Therefore, the employee's right to defense in all cases, except in the case of flagrant violation, is essential for the legitimate and valid exercise of the employer's disciplinary authority.

Thus, in order to avoid doubts or arbitrariness, it is advisable to include in the employer's internal employment regulations a chapter that sets out the particularities of the disciplinary proceeding or, in any case, a policy that clearly provides for this matter.

This is extremely important for employers, since it will prevent the Labor Inspection Authority, which has a uniform standard on this matter, from invalidating sanctions and applying fines for violating the right of defense and others derived from these facts and, furthermore, that in judicial proceedings, compensation is not granted or reinstatements are not ordered for the mere fact of having failed to comply with formal aspects related to disciplinary proceedings. |||



El valor de los elementos de propiedad intelectual como activo empresarial



Alguna vez se han preguntado cuál es la importancia de la protección de los activos intelectuales de una empresa?.

Las marcas, los lemas comerciales, las obras protegidas por el derecho de autor, el software y las innovaciones son activos intangibles que pueden llegar a representar gran parte del valor de una empresa.

La valuación de estos intangibles no es tarea sencilla. Incluso ahora no existe una norma que vincule a privados y en la que se establezca un método de valuación determinado para estos activos. Se habla de la determinación del valor en función a los flujos futuros, flujo de caja descontado, costo ajustado, entre otros métodos aún más abstractos y gaseosos.

Si hablamos de las marcas, estas se encuentran íntimamente relacionadas con su identidad y, en muchos casos, se traducen en su activo más importante. Ejemplos claros lo serían las marcas rankeadas en la edición 2024 de The Top 100 Most Valuable Brands¹, en el que Apple figura con un valor de USD 516.6 billones, Microsoft con USD 340.4 billones y Google con USD 333.4 billones.

El valor de las marcas –según el ranking bajo comentario– ha sido determinado en función a los ingresos sobre las marcas (incluyendo las regalías) y la fuerza de la marca (incluyendo la inversión en la marca, su reputación y su desempeño en el mercado).

De las 100 marcas rankeadas, 17 de ellas corresponden al rubro de tecnología, sector en el

¹ Información tomada de: <https://www.bankinter.com/blog/empresas/ranking-marcas-mas-valiosas-del-mundo>.

que claramente la protección de la innovación a través de las herramientas de propiedad intelectual (patentes, software, secretos industriales, entre otros) resulta fundamental. Estas herramientas buscan generar un monopolio que asegure la explotación a quien invirtió en su desarrollo y, además, promover que se continúe con dichas iniciativas.

Aun con ello, en la práctica, se nos sigue preguntando si para comenzar a usar una marca “esta debe ser registrada primero”. Y es que el registro de la marca no siempre se encuentra dentro de los elementos esenciales a considerar en el inicio de operaciones de una empresa. Tampoco lo es la protección de la innovación a través de las distintas figuras que la propiedad intelectual nos ofrece. Esto es un error.

Imagínense un escenario en el que se constituye una empresa y esta empieza a comercializar con éxito determinado producto. Ahora, imaginen que la marca que identifica a la empresa o a dicho producto no fue registrada en su momento y que, incluso, ya no puede ser registrada porque en el registro marcario ya existe una marca similar.

Ahora, piensen que dicho producto implica una nueva aplicación industrial que no se encontraba presente en el mercado y que no ha sido protegido debidamente, por lo que es “copiado” por la competencia, sin posibilidad de impedir dicho uso por no contar con los derechos registrados para tal efecto.

Estas situaciones pondrían en riesgo la inversión en términos de tiempo y dinero para dichas empresas, siendo que casos como los descritos anteriormente son más frecuentes de lo que se podría pensar y ello obedece al desconocimiento de los beneficios otorgados por la propiedad intelectual, pero sobre todo del valor que su debida protección aporta a las empresas.

Desde el valor de estos elementos en sí, su potencialidad para realizar transacciones como su venta o cesión, los esquemas licencias con el consecuente pago de regalías, hasta la posibilidad de usarlos como herramientas para lograr el apalancamiento en préstamos en beneficio de las compañías, entre otras múltiples alternativas de explotación, los activos intelectuales son elementos de suma importancia en términos económicos, que no deben ser descuidados o relegados y su protección debe ser oportuna y adecuada para poder maximizar sus beneficios.

Las marcas, los lemas comerciales, las obras protegidas por el derecho de autor, el software y las innovaciones son activos intangibles que pueden llegar a representar gran parte del valor de una empresa.



JOHANA CALDERÓN VALENCIA
Socia, especialista en propiedad intelectual
Partner, intellectual property specialist
jcalderonv@munizlaw.com

Importance of intellectual property as corporate assets

Have you ever wondered about the importance of protecting a company's intellectual property assets?

Trademarks, slogans, copyrighted works, software and innovations are intangible assets that may account for an important portion of a company's equity.

Valuation of these intangible assets is not an easy task. Even now, there is no rule binding private parties and establishing a specific valuation method for this type of assets. The methods used to determine its value are: value based on future cash flows, discounted cash flow (DCF), adjusted cost, among other even more abstract methods.

As regards trademarks, they are closely related to a company's identity and, in many cases, they are its most important asset. Clear examples are the trademarks ranked in the 2024 edition of The Top 100 Most Valuable Brands¹, in which Apple appears with a value of USD 516.6 billion, followed by Microsoft with USD 340.4 billion and Google with USD 333.4 billion.

Brand value - according to the aforementioned ranking - has been determined based on brand revenues (including royalties) and brand strength (including brand investment, brand reputation and market performance).

Seventeen of the top 100 brands are in the technology sector, a sector in which the protection of innovation through intellectual property tools (patents, software, industrial secrets, among others) is crucial. These tools seek to create a monopoly that ensures those who invested in their development can reap gains, while encouraging the continuation of such initiatives.

Despite this, in practice, people still ask whether a trademark "must be registered first," before it can be used. In fact, trademark registration is not always among the essential elements to be considered when starting a company. Neither is the protection of innovation through the different forms offered by intellectual property. This is a mistake.

Imagine a scenario where a company is established and it begins to successfully market a certain product.

Now, imagine that the trademark that identifies the company or the product was not registered at the time of incorporation and that it cannot even be registered because a similar trademark already exists in the trademark office.

Now, think that this product entails a new industrial application that was not present in the market and that has not been duly protected, so it is "copied" by the competition, with no possibility of preventing such use because it does not have the registered rights for that purpose.

These situations would put at risk the investment in terms of time and money for such companies, since cases such as those described above are more frequent than one might think. This is due to the lack of knowledge of the benefits provided by intellectual property, but mainly due to the value that its proper protection brings to companies.

The intrinsic value of IP elements, their potential for transactions such as sale or transfer, licensing schemes with the consequent royalty payments, to the possibility of using them as collaterals for loans that can benefit companies, among other multiple use alternatives. Intellectual property assets are crucial economic elements, which should not be neglected or relegated and their protection should be timely and adequately in order to maximize their benefits. |||

¹ Information retrieved from: <https://www.bankinter.com/blog/empresas/ranking-marcas-mas-valiosas-del-mundo>.



Precedentes vinculantes y predictibilidad judicial

Durante los últimos meses, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República (en adelante, QSDCST) ha emitido diversos precedentes vinculantes dentro de las sentencias que expidió para resolver los procesos judiciales de los que tuvo conocimiento.

Revisamos uno de ellos, la Casación n.º 16618-2023, y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuál es la verdadera finalidad de emitir un precedente vinculante?

Recordemos que los precedentes vinculantes son emitidos para establecer un criterio judicial uniforme respecto de un caso concreto, el cual contará con rango de norma jurídica vinculante para ser aplicado a los casos futuros análogos que requieran ser resueltos y así evitar que existan pronunciamientos contradictorios sobre controversias similares o idénticas.

De ello podemos concluir que el precedente vinculante

es una figura excepcional, en tanto debe recurirse a ella en casos muy particulares. Sin embargo, solo durante el año 2023, la QSDCST emitió nueve precedentes vinculantes. Esto implica que la emisión de precedentes está deviniendo en una figura de uso habitual, al menos para esta sala de la Corte Suprema.

Pero ¿por qué se está emitiendo un número elevado y poco usual de precedentes vinculantes?

La respuesta podríamos encontrarla precisamente en el precedente vinculante emitido por la QSDCST, a través de la Casación n.º 16618-2023.

En dicha sentencia, la mencionada Sala Suprema establece como precedente vinculante que “las sentencias casatorias que expide esta Sala Suprema, en virtud de su fuerza vinculante, tienen un grado de obligatoriedad y autoridad que se deriva del nivel de este órgano jurisdiccional que las emite y del ámbito de competencia en el que se aplican, lo que significa

que deben ser seguidas por los órganos jurisdiccionales de mérito en casos similares”¹.

A primera vista, este precedente no cumple con su característica principal de uniformizar criterios, dado que los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía de por sí deberían tomar en cuenta y seguir el razonamiento desarrollado por los superiores jerárquicos en casos similares, aun si la decisión del superior no fuera un precedente vinculante.

Ello se sustenta en el principio de predictibilidad judicial que implica “la exigencia de coherencia o regularidad de criterio de los órganos judiciales en la interpretación y aplicación del derecho”². Sin embargo, en nuestro sistema judicial no se respeta este principio, pues los órganos jurisdiccionales inferiores solo siguen lo argumentado por sus superiores jerárquicos cuando en sus decisiones establecen expresamente que se trata de un precedente vinculante.

Irónicamente, un claro ejemplo de ello es la materia controvertida que es resuelta mediante la Casación n.º 16618-2023, puesto que la controversia discutida en dicho proceso es la misma que se ha resuelto con anterioridad en más de tres casos por la Corte Suprema³. En efecto, la QSDCST ya se había pronunciado al respecto anteriormente; sin embargo, un nuevo proceso judicial llegó a dicho órgano jurisdiccional con la misma cuestión controvertida y sin que los órganos inferiores hayan tomado en cuenta lo resuelto anteriormente por la Corte Suprema en casos similares. Ello demuestra el nulo interés que existe en los órganos jurisdiccionales inferiores en seguir lo desarrollado por la Corte Suprema.

Esta falta de interés por respetar el principio de predictibilidad judicial es lo que ha obligado a esta Sala Suprema a emitir diversos precedentes vinculantes en los últimos meses, pues ha quedado en evidencia que, si una sentencia casatoria no contiene una decisión a la que se le otorgue el carácter de precedente vinculante, el criterio al que pueda arribar en cada uno de sus pronunciamientos la más alta instancia del Poder Judicial no será respetado por los órganos judiciales inferiores.

Entonces, ¿cuál fue la necesidad de la emisión del precedente vinculante establecido en la Casación n.º 16618-2023?

Pues, a través suyo se busca darle solución al grave problema que aqueja a la administración de justicia de nuestro país, el cual consiste en que la mayoría de los órganos jurisdiccionales no aplica los criterios

establecidos en las sentencias casatorias, pese a que las controversias que se someten a su competencia son idénticas o similares a las ya resueltas por la Corte Suprema.

¿Será suficiente la emisión de un precedente vinculante como el contenido en la Casación n.º 16618-2023 para acabar con la emisión de pronunciamientos disímiles en causas similares o idénticas que se ponen a conocimiento del Poder Judicial? En nuestra opinión NO, pues este problema en la administración de justicia requiere ser enfocado a nivel integral para poder aspirar a una solución real, lo cual no se dará a corto plazo. No obstante, consideramos que es un intento de solución positivo que dependerá de que se implemente algún tipo de supervisión y control a su ejecución para que no sea una resolución más que, al final del día, no se aplique en ninguna instancia judicial. ■

¹ Sentencia de la Corte Suprema, quinta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria n.º 16618-2023, 20 de setiembre de 2023.

² Sentencia del Tribunal Constitucional del Expediente n.º 00215-2018-PA/TC, 20 de agosto de 2020.

³ Ver la Casación n.º 00506-2020, emitida el 3 de marzo de 2022, Casación n.º 2232-2020, emitida el 26 de julio de 2022 y la Casación n.º 7762-2020, emitida el 11 de agosto de 2022.



JULISSA YAMANI FERNÁNDEZ

Socia, especialista en litigios y controversia

Partner, *litigation and dispute settlement specialist*

jyamani@munizlaw.com.com

Binding precedents and legal predictability

During the last few months, the Fifth Transitory Constitutional and Social Law Chamber of the Supreme Court of Justice of Peru (hereinafter, QSDCST, in Spanish) issued several binding precedents as part of its final judgments issued in cases under its jurisdiction.

We reviewed one of them, Cassation No. 16618-2023, and a question arose: what is the real purpose of issuing a binding precedent?

Binding precedents are issued to establish a uniform legal criterion with respect to a specific case. Such precedents have the status of a binding rule and are to be applied to future similar cases so as to avoid any inconsistent decisions on similar or identical controversies.

From this, we can conclude that a binding precedent is an exceptional legal institution, since it must be resorted to in very subsequent case. However, during 2023 alone, the QSDCST issued nine binding precedents. This means that the issuance of precedents is becoming a commonly used legal institution, at least for this division of the Supreme Court.

But, why are an unusually high number of binding precedents being issued?

The answer could be found precisely in the binding precedent issued by the QSDCST through Cassation No. 16618-2023.

In said judgement, QSDCST established as binding precedent that “the cassation judgements issued by this QSDCST, by virtue of their binding force, have a certain degree of mandatory nature and authority that derives from the level of this judicial body that issues them and the area of competence in which they are applied, which means that they must be followed by other judicial bodies in similar cases”.

At first sight, this precedent does not comply with its main characteristic of standardizing criteria since lower courts should take into account and follow the reasoning developed by higher courts in similar cases, even if the upper courts' decisions are not binding precedents.

This is based on the principle of legal predictability, which entails “the requirement of consistency or regular application of standards issued by judicial bodies when construing and applying any law.” However, in our legal system, this principle

is not observed, since the lower courts only follow the arguments of the higher courts when their decisions expressly state that it is a binding precedent.

Ironically, a clear example of this is the controversial matter settled by Cassation No. 16618-2023, since the dispute discussed in said proceeding is the same as the ones previously resolved in more than three cases by the Supreme Court. In fact, QSDCST had already ruled on the matter previously; however, a new legal proceeding came before that judicial body with the same controversial issue and without the lower courts having taken into account what had been previously decided by the Supreme Court in similar cases. This proves the lack of interest of lower courts to follow developments of the Supreme Court.

This lack of interest in following the principle of legal predictability is what forced this Supreme Court Division to issue several binding precedents in recent months, since it has become evident that, if a cassation does not contain a decision that is labeled as a binding precedent, the criterion or standard set by such rulings of such high instances of the Judiciary will not be followed by the lower courts.

Thus, one may wonder: what was the need for issuing the binding precedent established in Cassation No. 16618-2023?

It seeks to solve the serious problem in the administration of justice in Peru: the fact that most of the courts do not apply the standards or criteria established in cassation judgments, despite the fact that the controversies submitted to their jurisdiction are identical or similar to those already resolved by the Supreme Court.

Will the issuance of a binding precedent such as that contained in Cassation No. 16618-2023 be enough to put an end to the issuance of dissimilar rulings in similar or identical cases brought before the Judiciary? In our opinion, NO, because this problem in the administration of justice needs to be approached in a comprehensive manner in order to aspire to a real solution, which will not happen in the short term. However, we believe that this is a positive attempt at a solution, which will depend on the implementation of some type of supervision and control of its implementation so that it is not just some other ruling that, at the end of the day, is not applied by any court. ||

¹ Judgment, No. 16618-2023, September 20, 2023, issued by the Fifth Transitory Constitutional and Social Law Chamber of the Supreme Court of Justice of the Peru (QSDCST).

² Judgment of the Constitutional Court in Docket No. 00215-2018-PA/TC, August 20, 2020.

³ See Cassation No. 00506-2020 issued on March 3, 2022, Cassation No. 2232-2020 issued on July 26, 2022, and Cassation No. 7762-2020 issued on August 11, 2022.



Comentarios sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) desde un enfoque penal

Todos los 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta celebración, cuyo origen se remonta al año de 2003, tiene su proclamación oficial en junio de 2022, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo decidió incluir un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. Desde esta proclamación se le reconoce como un derecho y principio universal que busca promover en el mundo una cultura de prevención de los riesgos laborales existentes al interior de las empresas y fábricas, además de recordar a las víctimas de los accidentes.

MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE SST

Muchas manifestaciones del derecho a la SST se encuentran recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: tanto la vida como la

libertad y la seguridad personal del individuo no pueden ser satisfechas totalmente si es que no se garantiza la SST como eje central del desarrollo humano.

En nuestro país, el derecho a la SST no tiene un reconocimiento expreso en el marco constitucional, pero forma parte del bloque de constitucionalidad debido a los tratados y acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Perú. No obstante, se tiene vigente la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley n° 29783, sus modificatorias y normas reglamentarias: para ellas es importante promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, por lo que se cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales para velar, promover, difundir y cumplir las normas sobre SST.

SST EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PENAL PERUANO

Para nuestro ordenamiento penal, la SST contempla un tipo específico para sancionar las conductas que vulneren el principio y derecho mencionado: el delito de atentado contra las condiciones de SST impone la obligación a quienes están obligados a cumplir las normas de SST, de evitar poner en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, de forma grave, imponiéndose penas privativas de libertad que pueden llegar hasta los seis años en caso de lesión grave y ocho años en caso de muerte del trabajador, para lo cual se deberá demostrar que el responsable actuó deliberadamente; esto es con total conciencia y voluntad de incumplir las normativas laborales dictadas para dicho fin de prevención.

En este delito existe un responsable que debe velar porque las condiciones de SST sean adecuadas y cumplan los estándares dictados en la normativa nacional vigente y tratados internacionales. Ello impone el deber al responsable –quien puede ser el gerente u otro que, de acuerdo al MOF de la empresa, deba cumplir con dicha labor– de gestionar un sistema de inspección suficiente y apropiado que contribuya a mejorar la aplicación de las normas en SST, perfeccionar los procedimientos para declaración y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, fortalecer las relaciones entre los llamados a velar por la mejora de las condiciones de SST dentro de la empresa y promover las condiciones mínimas de seguridad, entre otras labores específicas.

Siendo así, resulta muy aconsejable que todos los empresarios y, principalmente, aquellos que tienen bajo su supervisión a personas que realizan labores diversas, desde las de un simple oficinista hasta las propias de los obreros en una factoría, cumplan con respetar las normas laborales, desarrollen protocolos y establezcan canales de prevención de contingencias laborales de este tipo, a fin de evitar ser sancionados. Tarea ardua que implica, por cierto, el uso de diversos mecanismos de compliance que sólo los estudios legales corporativos están en condiciones de diseñar. |||

Todos los 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta celebración, cuyo origen se remonta al año de 2003, tiene su proclamación oficial en junio de 2022, cuando la Conferencia Internacional del Trabajo decidió incluir un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT.



JUAN JOSÉ ALBÁN PARRA

Asociado senior, especialista en derecho penal – Sede Piura
Senior Member, Criminal Law specialist - Piura Branch
jalban@munizlaw.com

Comments on Occupational Safety and Health (OSH) from a Criminal Approach

Every year, on April 28, we mark the World Day for Safety and Health at Work. This celebration, dating back to 2003, was officially proclaimed in June 2022, when the International Labor Conference decided to include a safe and healthy working environment in the ILO's framework of fundamental principles and rights at work. Since this proclamation, it has been recognized as a universal right and principle that seeks to promote a culture of prevention of occupational hazards inside companies and factories throughout the world, in addition to remembering the victims of accidents.

CONSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR OSH

Many manifestations of the right to OSH are found in the Universal Declaration of Human Rights: The life as well as the liberty and personal safety of an individual cannot be fully satisfied if OSH is not guaranteed as a backbone of human development.

In our country, the right to OSH is not expressly recognized within the constitutional framework, but is part of the constitutional block due to the international treaties and agreements on human rights ratified by Peru. Nevertheless, the Occupational Health and Safety Act, Act No. 29783, its amendments and regulations are in force: For them it is important to promote a culture of occupational risk prevention in the country; therefore, employers have the duty to prevent, the State has an auditing and control role, and employees and their unions must participate by being in the lookout, promoting and complying with OSH rules.

OSH IN THE PERUVIAN CRIMINAL LAW SCOPE

In our criminal law, OSH contemplates a specific offense to punish any behavior that violates the aforementioned principle and right: The crime of adversely affecting OSH conditions. This imposes an obligation to those who must comply with OSH regulations to avoid seriously jeopardizing the life, health or physical integrity of their workers by imposing prison sentences that can go up to six years in case of serious injury and eight years in case of death of the worker. For this, there must be evidence of a deliberate action from the person in charge, that is, that the person was fully aware and had the will to breach the labor regulations issued for prevention purposes.

In the commission of this crime, there is a person responsible

for ensuring that the OSH conditions are adequate and the standards imposed by the national regulations in force and international treaties are met. This obliges the person in charge –who can be the manager or another person who, according to the company's Organization and Duties Handbook (MOF), must fulfill this task– to manage a sufficient and appropriate oversight system that contributes to improving the application of OSH standards, to improve the procedures for reporting and recording occupational accidents and diseases, to strengthen relations between those called upon to ensure the improvement of OSH conditions within the company and to promote minimum safety conditions, among other specific tasks.

Therefore, it is highly advisable that all employers, especially those who have people who perform several tasks, from simple office work to factory work, under their supervision meet the labor standards, develop protocols and establish channels for the prevention of this type of labor contingencies, in order to avoid sanctions. Certainly, this is a difficult task that implies the use of several compliance mechanisms that only corporate law firms are in a position to design. |||



En el segundo trimestre del 2024 destacaron dos proyectos de ley. A continuación, presentamos un resumen de ambas iniciativas legislativas.

Considerar perdigones y pistolas de descarga eléctrica como armas no letales¹

Mediante el Proyecto de Ley n.º 7672², el congresista Héctor Valer Pinto, de Somos Perú, propone modificar el Decreto Legislativo n.º 1186 para permitir la inclusión de perdigones y pistolas de descarga eléctrica entre las armas no letales utilizadas por la Policía Nacional del Perú.

La propuesta explica que las tácticas defensivas no letales como el uso de irritantes químicos y proyectiles de goma de impacto cinético buscan ser empleadas únicamente cuando existan agresiones directas y evidentes contra las fuerzas del orden o terceros.

Esta reforma pretende garantizar el control de multitudes en distintos escenarios de protestas y manifestaciones y, al mismo tiempo, reducir o evitar las posibilidades de una fatalidad durante los enfrentamientos.

Derogar decreto legislativo que condena hasta con 15 años el bloqueo de vías³

El congresista Guido Bellido presentó el Proyecto de Ley n.º 7603⁴, que busca derogar el Decreto Legislativo n.º 1589, mediante el cual el Gobierno endureció las penas contra los manifestantes que bloquen carreteras, obstaculicen los servicios públicos o tomen infraestructura pública como puertos y aeropuertos.

Como se recuerda, esta medida permite sentenciar con hasta 15 años de cárcel por la comisión de este delito. Entre las modificaciones planteadas, se establece la condena entre cuatro y seis años de cárcel, y recibir 180 días-multa, si se impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento de transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, gas e hidrocarburos.

La iniciativa también contempla el uso indebido de prendas o símbolos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional (8 a 10 años de cárcel); atentar contra personas y causar lesiones graves (de 8 a 12 años); afectar infraestructura portuaria para la extracción, procesamiento y distribución de hidrocarburos, o si se ven comprometidas vías terrestres nacionales, departamentales, locales y fluviales (de 10 a 15 años); y causar a muerte a otra persona (como mínimo 15 años). ■

* El Estudio Muñiz presenta bimestralmente a todos sus clientes el producto legal Desde el Congreso; una publicación que contiene una selección de los proyectos de ley que están siendo discutidos el Congreso de la República y que pueden afectar al entorno empresarial. En Columnas publicaremos dos de los varios proyectos publicados y que todavía están en comisiones.

¹ (24 de abril de 2024). Congreso: proponen considerar perdigones y pistolas de descarga eléctricas como armas no letales. La República Perú. <https://larepublica.pe/politica/2024/04/24/congreso-plantean-incluir-pistola-de-descarga-electrica-en-armas-no-letales-para-control-de-protestas-pnp-798000>

² Proyecto de ley 7672/2023-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7672>

³ (18 de abril de 2024). Proponen derogar DL 1589 de Dina Boluarte que condena hasta con 15 años de cárcel el bloqueo de vías. La República Perú. <https://larepublica.pe/politica/2024/04/17/proponen-derogar-dl-1589-de-dina-boluarte-que-condena-hasta-con-15-anos-de-carcel-el-bloqueo-de-vias-congreso-guido-bellido-796297>

⁴ Proyecto de ley 7603/2023-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7603>



Two bills stood out in the last quarter of 2024. Below, we provide a summary of both legislative initiatives.

Consider pellets and stun guns as non-lethal weapons¹

By Bill No. 7672¹, Congressman Héctor Valer Pinto, from Somos Perú caucus, proposed the amendment of Legislative Decree No. 1186 to allow the inclusion of pellets and stun guns among the non-lethal weapons used by the Peruvian National Police Force.

The proposal includes an explanation that both non-lethal defensive techniques and the use of chemical irritants and kinetic impact rubber buckshots are intended to be used only in the event of direct and evident aggressions against law enforcement or third parties.

This reform aims at ensuring crowd control in different protest scenarios and, at the same time, reducing or preventing the possibilities of fatalities during confrontation.

Legislative Decree sentencing up to 15 years for road blockades is revoked²

Congressman Guido Bellido submitted Bill No. 7603⁴, which aims at repealing Legislative Decree No. 1589, whereby the Government stiffened penalties against protesters blocking roads, obstructing public services or taking over public infrastructure such as ports and airports.

This is a measure that allows rulings for up to 15 years in prison for committing this crime. Among the amendments suggested, it sets out that the sentence between four and six years in prison, and 180 day fines, if the normal operation of transportation or public services such as telecommunications, sanitation, electricity, gas and hydrocarbons is prevented, hindered or hampered.

This initiative also includes the improper use of clothing or symbols of the Military or the National Police (8 to 10 years in prison); attacking people and causing serious injuries (8 to 12 years); affecting port infrastructure for the extraction, processing and distribution of hydrocarbons, or if national, departmental, local and fluvial routes are compromised (10 to 15 years); and causing the death of another person (at least 15 years). |||

¹ Estudio Muñiz delivers its clients the legal product "From the Congress" on a bimonthly basis. This is a publication containing a selection of the bills currently in debate in the Congress of the Republic, which can affect the business environment. Columnas will include two of several published projects which are still under commissions.

¹ (April 24, 2024). Congress: proposal to consider pellets and stun guns as non-lethal weapons. La República Perú. <https://larepublica.pe/politica/2024/04/24/congresoplantean-incluir-pistola-de-descarga-electrica-en-armas-no-letales-para-control-de-protestas-pnp-798000>

² Bill 7672/2023-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7672>

³ (April 18, 2024) Proposal to revoke Legislative Decree No. 1589 by Dina Boluarte that sentences up to 15 years in prison for blocking roads. La República Perú. <https://larepublica.pe/politica/2024/04/17/proponen-derogar-dl-1589-de-dina-boluarte-que-condena-hasta-con-15-anos-de-carcel-el-bloqueo-de-vias-congreso-guido-bellido-796297>

⁴ Bill 7603/2023-CR. <https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/7603>

APRUEBAN PORCENTAJE PARA LÍMITE DE DEVOLUCIÓN DEL ISC DEL PRIMER TRIMESTRE 2024

SE APRUEBA EL PORCENTAJE REQUERIDO PARA DETERMINAR EL LÍMITE MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

Le informamos a nuestros clientes que mediante la Resolución de Superintendencia n.º 000075-2024/SUNAT, publicada el 14 de abril de 2024, la Administración Tributaria ha establecido el porcentaje para determinar el límite máximo de devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) dispuesto por el Reglamento del Decreto de Urgencia n.º 01-2 2019.

Antecedentes

Mediante el Decreto de Urgencia n.º 012-2019 y la Ley n.º 31647, se otorgó un beneficio tributario a ciertos transportistas, consistente en la devolución del equivalente al setenta (70 %) del ISC que forma parte del precio de venta del combustible diésel B5 y diésel B20 con un contenido de azufre menor o igual a 50ppm, adquirido de distribuidores mayoristas o minoristas o establecimientos de venta al público de combustibles con comprobante de pago electrónico hasta el 31 de diciembre de 2025.

¿Cuál es la finalidad de la norma?

Aprobar el porcentaje a que hace referencia el literal b) del numeral 4.4 artículo 4 del Reglamento del Decreto de Urgencia n.º 012-2019 aplicable a los meses de enero, febrero y marzo de 2024, con la finalidad de poder atender las solicitudes de devolución de ISC que presenten los transportistas antes indicados, por el tercer trimestre del año 2024.

¿A quiénes se aplica?

- i. Transportistas que prestan el servicio de transporte terrestre regular de personas de los ámbitos provincial, regional y nacional.
- ii. Transportistas que prestan el servicio de transporte público terrestre de carga.

¿De qué manera los afecta?

Para efectos de determinar el límite máximo de devolución del ISC del mes, se deberá tomar en cuenta los siguientes porcentajes del ISC sobre el precio por galón de combustible, de conformidad con las disposiciones del artículo 4 del Reglamento del Decreto de Urgencia n.º 012-2019:

MES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL ISC %
Enero 2024	10,30 %
Febrero 2024	10,35 %
Marzo 2024	10,36 %

¿Cuándo entra en vigor la norma?

La resolución entró en vigor el 15 de abril de 2024.

Puede acceder al texto completo de la Resolución de Superintendencia en el siguiente enlace:

Resolución de Superintendencia No. 000075-2024/SUNAT

EXCISE TAX REFUND LIMIT PERCENTAGE FOR FIRST QUARTER 2024 APPROVED

THE PERCENTAGE REQUIRED TO DETERMINE THE MAXIMUM REFUND LIMIT TO THE EXCISE TAX FOR THE FIRST QUARTER OF 2024 HAS BEEN APPROVED.

We inform our clients that, by Resolution Superintendency Resolution No. 000075-2024/SUNAT, published on April 14, 2024, the Tax Administration Authority has established the percentage that will determine the maximum refund limit to the Excise Tax as per the Regulations of Emergency Decree No. 012-2019.

Background information

By Emergency Decree No. 012-2019 and Law No. 31647, a tax benefit was granted to certain transportation companies, which consists of the refund of an amount equivalent to seventy (70%) of the Excise Tax that is part of the sale price of diesel B5 and diesel B20 fuels - which have a sulfur content lower than or equal to 50ppm - that was purchased from wholesale or retail suppliers or fuel retailers with electronic proof of payment until December 31, 2025.

What is the purpose of this regulation?

To approve the percentage referred to in paragraph 4.4 .b) of Article 4 of the Regulations of Emergency Decree No. 012-2019 applicable to January, February and March 2024, in order to address the Excise Tax refund requests submitted by the aforementioned transportation companies for the third quarter of 2024.

To whom does it apply?

- i. Transportation companies providing regular land transportation service for people at the provincial, regional and national levels.
- ii. Transportation companies providing public land freight transport services.

How does it affect them?

For the purposes of determining the maximum Excise Tax refund limit for the month, the following Excise Tax percentages on the price per gallon of fuel will be taken into account, according to the provisions in Article 4 of the Regulations of Emergency Decree No. 012-2019:

MONTH	EXCISE TAX SHARE %
January 2024	10,30 %
February 2024	10,35 %
March 2024	10,36 %

When does this regulation become effective?

The resolution became effective on April 15, 2024.

To access the full text of the Resolution, click on the following link:
[Superintendency Resolution No. 000075-2024/SUNAT](#)

Desayuno ejecutivo

Llevamos a cabo nuestro segundo desayuno ejecutivo en materia laboral, tributaria y publicitaria con nuestros clientes, en el que Ricardo Herrera, socio principal y director del área de Derecho Laboral y Seguridad Laboral; Luis García, socio senior del área de Derecho Tributario; y Alex Sosa, socio del área de Publicidad, Consumo y Privacidad, comentaron las principales novedades para el 2024.

We held our second executive breakfast on labor, tax and advertising matters with our clients, where Ricardo Herrera, senior partner and director at the Labor Law and Social Security area; Luis García, senior partner at the Tax Law area; and Alex Sosa, partner at the Advertising, Consumption and Privacy area, commented on the main developments for 2024.



World Trademark Review

El Departamento de Marcas del Estudio Muñiz fue reconocido por la principal guía mundial que identifica a las firmas de abogados y a los abogados en el ámbito marcario. La publicación destacó a Piero Calderón, socio senior y codirector de Propiedad Intelectual; y a Johana Calderón, asociada senior de dicha área.

Estudio Muñiz' Trademark Department was acknowledged by the world's leading guide that identifies law firms and lawyers in the trademark field. This publication acknowledged Piero Calderón, senior partner and co-director of the Intellectual Property area; and Johana Calderón, senior associate in the same area.

Leaders League 2024

Fuimos considerados por Leaders League 2024 como uno de los estudios de abogados más destacados del mercado legal peruano en: Administrative litigation; Arbitration; Civil and commercial litigation; Compliance; y White collar crime.

Leaders League 2024 included Estudio Muñiz as one of the most outstanding law firms in the Peruvian legal market in Administrative litigation; Arbitration; Civil and commercial litigation; Compliance; and White collar crime.





Legal500

PRIVATE PRACTICE POWERLIST 2024
M&A | LATIN AMERICA

Mauricio Olaya Juan Carlos Vélez

ESTUDIO MUÑIZ | HUÉZ DÍAZ CALDERÓN GONZÁLEZ ARENAL Abogados

The M&A Powerlist: Latin America 2024

Mauricio Olaya, socio principal y director del área de Derecho Corporativo y M&A; y Juan Carlos Vélez, socio senior, han sido incluidos en The M&A Powerlist: Latin America 2024 de The Legal 500, que considera a los abogados expertos en la práctica de fusiones y adquisiciones (M&A) más reconocidos en Latinoamérica. |||

Mauricio Olaya, senior partner and Director of the Corporate Law and M&A area; and Juan Carlos Vélez, senior partner, have been included in The M&A Powerlist: The Legal 500 Latin America 2024, which mentions the most recognized mergers and acquisitions (M&A) lawyers in Latin America. |||

Deal of the Quarter 1Q24

TTR Data, prestigiosa plataforma dedicada al monitoreo de operaciones de M&A, consideró como la transacción Deal of the Quarter 1Q24 la adquisición de AvoAmérica Perú por parte de Unifrutti Grop. |||

TTR Data, a prestigious platform engaged in M&A transaction monitoring, considered Unifrutti Group acquisition of AvoAmérica Perú as Deal of the Quarter 1Q24. |||



The Legal 500
Country Comparative Guide
Peru
DOING BUSINESS IN

The Legal 500
Country Comparative Guide
Peru
DOING BUSINESS IN

ESTUDIO MUÑIZ | HUÉZ DÍAZ CALDERÓN GONZÁLEZ ARENAL Abogados

The Legal 500
Country Comparative Guide
Doing Business in Perú

Mauricio Olaya
Socio principal

José Ballón
Socio principal

Carlos Arata
Socio senior

The Legal 500: Doing Business In Comparative Guide

Nuestro socio principal y director del área de Derecho Corporativo y M&A, Mauricio Olaya; y nuestros socios principal y senior, respectivamente, José Ballón y Carlos Arata, elaboraron el capítulo peruano de la tercera edición de The Legal 500: Doing Business In Comparative Guide. Este documento brinda una descripción general de cómo hacer negocios según las leyes y regulaciones aplicables en el Perú. |||

Our senior partner and Director of the Corporate Law and M&A area, Mauricio Olaya, and our main and senior partners, respectively, José Ballón and Carlos Arata, prepared the Peruvian chapter for the third edition of The Legal 500: Doing Business in Comparative Guide. This document provides a general description of how to do business under applicable Peruvian laws and regulations. |||

El 22 de mayo se llevó a cabo la presentación del GC Powerlist Peru, donde se destaca y reconoce el trabajo de los gerentes legales más influyentes del mercado peruano. Este evento es organizado por The Legal 500 y el Estudio Muñiz fue el auspiciador.

On May 22, the presentation of the GC Powerlist Peru took place, where the work of the most influential legal managers in the Peruvian market is highlighted and recognized. This event is organized by The Legal 500 and Estudio Muñiz was the sponsor.



El pasado jueves 16 de mayo copatrocinamos el evento "Americas Initiative in Lima: Disruptions en los arbitrajes de construcción", organizado por el Institute for Transnational Arbitration; en donde participó como moderador Edwin Pezo, socio senior del área de Arbitraje Internacional, y como panelistas Yuri Vega Mere, socio principal; Elina Mereminskaya, head partner de Wagemann Arbitration; y Ramiro Portocarrero, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria.

Last Thursday, May 16, we co-sponsored the event "Americas Initiative in Lima: Disruptions in construction arbitrations", organized by the Institute for Transnational Arbitration; where Edwin Pezo, senior partner of the International Arbitration area, participated as moderator; and Yuri Vega Mere, senior partner, participated as panelists; Elina Mereminskaya, head partner of Wagemann Arbitration; and Ramiro Portocarrero, partner at Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria.



Las Begonias 475, Piso 6
Lima 27 - Perú
T (51-1) 611-7000
 www.munizlaw.com



MUÑIZ
OLAYA
MELEÑEZ
CASTRO
ONO
& HERRERA
Abogados



Lima - Trujillo - Arequipa - Ica - Chincha - Cusco - Piura - Chiclayo - Chimbote - Tacna - Ilo - Puno - Juliaca